

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medellín, dieciséis (16) de febrero de 2023.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501820150134701, promovido por la señora **MARIA BERENICE MACÍAS AGUILAR** en contra de **COLPENSIONES E INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S.**, con la finalidad de revisar en consulta y apelación la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Medellín, el Catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **031**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora María Berenice Macías de Aguilar solicitó mediante el presente proceso, se declarará la existencia de una relación laboral con INDUSTRIAL CONCRETO S.A.S. denominada antes Agregados Garantizados del Norte SA, entre el 24 de septiembre de 1990 y el 24 de diciembre de 1990, el 8 de enero de 1991, el 8 de junio de 1991, el 5 de agosto de 1991 y el 30 de abril de 2012, y se declare que el empleador, se encuentra en mora en el pago de aportes en pensión ante Colpensiones, en los ciclos comprendidos entre 9 de enero de 1991 y el 30 de abril del mismo año. Solicitó también el reconocimiento y pago por parte de Colpensiones de la pensión de vejez de manera retroactiva desde el 1 de marzo de 2012, con la calidad de beneficiaria del régimen de transición, las mesadas adicionales de junio y diciembre e intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que laboró para INDUSTRIAL CONCRETO S.A.S. entre las fechas enunciadas en las pretensiones, y ante Colpensiones presenta mora en el pago de periodos que suman en total 15.85

semanas, argumenta que a la fecha de entrada en vigencia del acto legislativo contaba con 750 semanas y en toda su vida laboral con más de 1.000 semanas, pero Colpensiones negó la prestación de vejez y canceló a su favor indemnización sustitutiva.

Admitida la demanda y notificada a las demandadas, dieron respuesta al libelo gestor así:

Colpensiones, expuso, que, es cierto el número de semanas cotizadas superior a 1.000, es decir, cuenta con un total de 1062 en todo su haber laboral, pero al 25 de julio de 2005 tiene solo 715.5 semanas cotizadas, monto inferior al requerido.

Indica que, entre el 5 de agosto de 1991 y el 25 de julio de 2005 la demandante tiene un total de tan solo 694.21 semanas cotizadas.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones de “*Cosa juzgada*”, “*Inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir*”, “*Inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios*”, “*Buena Fe*”, “*Prescripción*”, “*Compensación*”, “*Cobro de lo no debido*”, “*innominada o genérica*”.

INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S., por su parte, contestó que la unió con la demandante tres contratos, desde el 24 de septiembre de 1990 al 21 de diciembre de 1990, del 8 de enero de 1991 a 7 de junio de 1991, 5 de agosto de 1991 a 30 de abril de 2012, sin que se presente mora alguna en el pago de los aportes de 9 de enero al 30 de abril de 1991, pues era en su momento el Instituto de Seguros Sociales el encargado de realizar la cuenta de cobro global o mensual de los afiliados de la empresa, y por ende, quien debía hacer el registro correspondiente

a los periodos de cada trabajador de manera individual. Explica, que la empresa cuenta con reporte de semanas cotizadas en donde se certifican los pagos de 30 de septiembre de 1990 a 8 de enero de 1991 por un total de 14.43, del 30 de abril de 1991 al 18 de junio de 1991 por 7.14 semanas y del 6 de agosto de 1991 al 31 de diciembre de 1997 por 177.77 semanas.

Finalmente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones de: “*Prescripción*”, “*Inexistencia de la obligación*”.

En sentencia proferida el catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) el juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, declaró que la demandante era beneficiaria del régimen de transición, ordenó el pago de la pensión de vejez desde el 10 de septiembre del año 2012, con el retroactivo y la indexación, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y compensación respecto al pago indexado de la indemnización sustitutiva. Declaró no probada la excepción de cosa juzgada y, absolvió a la pasiva de las demás pretensiones incoadas en su contra.

APELACIÓN

Interpuso la parte accionada recurso de alzada respecto a la absolución de INDUSTRIAL CONCRETO S.A.S., solo, en el caso que el superior no comparta la decisión tomada por la juez de primera instancia, igualmente enunció estar inconforme con la prescripción declarada de manera parcial, pues indica que, Colpensiones expidió el acto administrativo 006972 de 2012 induciendo en error a la demandante, por lo cual, se apresuró a solicitar la indemnización sustitutiva, momento en que la entidad debió realizar nuevamente el estudio pensional, y no

lo hizo, sin que pueda entenderse que mesada alguna se encuentra prescrita. Solicita también la condena respecto a los intereses moratorios, pues arguyó que la entidad fue negligente y la finalidad de éstos es precisamente resarcir al afiliado cuando la entidad se niega a reconocer el termino oportuno. Solicita igualmente sea revocada también la excepción de compensación respecto a la orden dada de ser indexada, pues así no fue solicitada por la entidad.

Corrido el traslado para alegar, las partes no hicieron pronunciamiento alguno, pues quien dice ser procurador judicial de Colpensiones no cuenta con poder alguno.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar si existe mora por parte de INDUSTRIAL CONCRETO S.A.S., antes Agregados Garantizados del Norte S.A., en el pago de los aportes en pensión ante Colpensiones en los periodos de 9 de enero de 1991 a 30 de abril de 1991, de ser así, si es procedente ordenar el pago de dichos periodos, e incorporarlos en la historia laboral de trabajadora. Superado ello, verificar si la demandante cuenta con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, si conserva el beneficio del régimen de transición y, la procedencia de las excepciones propuestas por la pasiva.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Por su parte, el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en

los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo; y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado. (Sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En la actividad probatoria respecto a los extremos de la relación contractual, reposa en página 43 certificado laboral expedido por Agregados y Garantizados del Norte, en donde se certifica que la trabajadora, laboró desde el 24 de septiembre de 1990 a 24 de diciembre de 1990 y desde el 8 de enero de 1991 al 8 de junio del año 1991. Igualmente, en certificación que reposa en página 44 del expediente, se constata que la demandante se vinculó el 5 de agosto de 1991 de manera ininterrumpida y hasta el 30 de abril del año 2012, información que es coherente con los documentos incorporados al plenario de página 135 a 440 del expediente, sin que exista elemento probatorio alguno que exponga situación contraria.

Ahora, indica la parte demandante que, el empleador Industrial Conconcreto SAS., omitió su deber de pagar los aportes correspondientes por los periodos del 9 de enero de 1991 y hasta el 30 de abril de 1991.

Conforme el formulario de afiliación que reposa en el expediente en folio 138, se constata que, la demandante fue afiliada por su empleador Agregados del Norte SA para el 8 de enero del año 1991, verificándose en el extremo superior derecho la radicación efectiva realizada al entonces ISS, de dicha documental. Con ello, es claro que el empleador para el 9 de enero del año 1991, tenía cubierta a su empleada en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, subrogando dichas contingencias ante el entonces Instituto de Seguros Sociales, pues desde el Acuerdo 224 de 1966, artículo 60 y 61, se implementó ello.

Es así, como debe recordarse la sentencia CSJ SL1078-2021, en la que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, explicó detalladamente la diferencia entre la falta de afiliación y la mora patronal, así como las consecuencias de cada una:

La distinción entre falta de afiliación y la mora patronal.

Es pertinente reiterar la distinción que viene haciendo esta Sala de que una situación es la mora en la cancelación de los aportes y otra muy distinta es la falta de afiliación al sistema. En la primera (la mora), la consecuencia de la conducta del empleador no se traslada al afiliado, si antes no se acredita que la administradora adelantó las gestiones de cobro correspondientes, mientras que, ante la ausencia, omisión o inactividad de la afiliación originada por el empleador que apareja la falta de comunicación de ingreso al sistema, el empleador debe asumir el pago de las cotizaciones correspondientes al periodo omitido, a través del denominado cálculo actuarial o título pensional, que es el mecanismo legal que refiere el art. 33 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL3004-2020).

En el caso de la no afiliación, la Corporación enseña que esta circunstancia no puede equipararse a la mora, pues no resulta comparable la situación del empleador que afilia a sus trabajadores e incumple el pago de algunos periodos con quien no comunica su ingreso al sistema, ya que el empleador debe asumir el pago de las prestaciones que le hubieran correspondido a las administradoras en caso de afiliación [...].

Ahora, del reporte de semanas dado por el entonces ISS en página 132 del proceso, se constata que la demandante para el periodo en pugna, reporta un extremo final de la relación laboral, es decir, para el 1991/01/08 se encuentra finalizada la relación laboral con un reingreso en 1991/04/30 situación **incoherente** con el formulario de afiliación del que se hizo referencia con antelación y con los reportes de pago de páginas 187 a 440 que dan fe de la consignación respecto a la cotización de la empleada por los meses sucesivos, a enero de 1991, cotizaciones que, no se encuentran reportadas en las historias laborales que fueron remitidas por la pasiva, pues se insiste, incluso en el compilado anterior 1995, página 148-149, se omitió la incorporación correcta de los tiempos debidamente cotizados pese a los pagos de realizados por el empleador.

No es este proceso entonces, un debate respecto a los periodos en mora, sino, respecto a la omisión de Colpensiones de incorporación de los periodos efectivamente cotizados por el empleador y de error, respecto a las novedades presentadas, pues se insiste, pese a la novedad de retiro que data a en historia laboral página 180, la novedad realmente reportada para el 8 de enero del año 1991 fue **la afiliación de la empleada**, afiliación, que no tuvo reparo alguno por parte de Colpensiones, quien debió en su momento, efectuar si era el caso, los rechazos pertinentes y no lo hizo, error administrativo que llevó a inferir una mora patronal que nunca existió.

En atención a lo anterior, le asistió razón a la *a quo* al concluir, que debía tenerse en cuenta todos los periodos durante la relación laboral, los cuales, se insiste, no se encuentran en mora, sino, que no fueron incorporados en la historia laboral por parte de Colpensiones, pues la pasiva Industrial Conconcreto SAS, si demostró su

diligencia y cuidado allegando los pagos correspondientes a los periodos laborados por la trabajadora durante toda la relación laboral.

De acuerdo a la información descrita, ya que la demandante siempre laboró con el mismo empleador, la historia laboral correspondiente a los pagos efectuados, arroja la siguiente densidad de semanas:

EMPLEADOR	PERIODO	SEMANAS
Agregados del Norte S.A.	1/10/1990 a 18/06/1991	37
	05/08/1991 a 30/04/2012	1069
Total		1106

El legislador, en la Ley 100 de 1993, estableció un periodo de transición en su artículo 36 consistente en que, a ciertas personas, en razón a su cercanía a adquirir el derecho a la pensión de vejez, se les conservarían algunas de las condiciones contempladas en el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigencia el nuevo Sistema General de Pensiones. Dicho artículo, dispuso que la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que tuvieran más de 15 años de servicios cotizados o 35 años mujer o 40 años hombre, a la fecha de entrada en vigencia el nuevo sistema pensional contenido en la ley 100 de 1993, 1º de abril de 1994, sería la establecida en el régimen anterior al que se encontraban afiliados, y toda vez que la demandante siempre reflejó cotizaciones al sector privado, su normativa anterior sería el decreto 049 de 1990.

Toda vez que la demandante nació el 12 de enero de 1943, de acuerdo al registro civil de nacimiento que reposa en folio 25 del expediente, para la entrada en

vigencia de la ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994 contaba con 51 años de edad, por lo cual, debe decirse que en un primer momento es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 ya explicado.

Sin embargo, el acto legislativo 001 de 2005 realizó modificaciones al régimen de transición ya enunciado así:

ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y párrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

.....

Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010".

"Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".

"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen".

Es así, como la demandante, debía cumplir la edad y densidad de semanas necesarias para pensionarse, para el 31 de junio del año 2010, o extender dicha prerrogativa hasta el año 2014, sólo si para el 25 de junio del año 2005 contaba con 750 semanas.

A la luz del decreto 049 de 1990, debía cumplir los siguientes requisitos para acceder a la pensión de vejez:

ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

Habiendo nacido el 12 de enero de 1943, la señora María Berenice Macías para el mismo día y mes del año 1998, cumplió con los 55 años de edad, por lo cual, solo restaba obtener el requisito de la densidad de semanas. Para ello, y conforme declaración realizada con anterioridad en la presente providencia, se revisa la historia laboral de la demandante, encontrando que en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad mínima requerida cotizó un total de 370 semanas, insuficientes ante primera opción del artículo 12 del decreto 049 de 1990.

Sin embargo, en todo su haber laboral cumple con 1106 semanas cotizadas, arribando a 1.000 semanas el 7 de abril del año 2010, es decir, antes de los límites establecidos en el acto legislativo 001 de 2005, sin que hubiere ni siquiera que estudiarse si contaba con las 750 semanas al 25 de junio de 2005, pues se insiste, cumple con las 1.000 semanas necesarias en los límites del acto legislativo, empero, continuó cotizando al sistema general de pensiones hasta el 30 de abril del año 2012 postergando el disfrute de la prestación, que ya claro había causado.

Se concluye entonces que, la demandante es beneficiaria del régimen de transición, pues causó su derecho desde el 7 de abril del año 2010 y el disfrute de la prestación desde el 1 de mayo del año 2012, pues su última cotización efectiva data del mes de abril del año 2012 por 30 días, momento para el cual, reporta la novedad de retiro del sistema. Ello se precisa, toda vez que, la causación del derecho se dio para el 7 de abril del año 2010, es decir, cuando se reunieron en la señora Macías de Aguilar los requisitos objetivos (semanas cotizadas) y subjetivos (edad) para acceder a la prestación, pero el disfrute, sólo lo causa, el 1 de mayo de 2012, día siguiente al retiro definitivo del sistema, novedad inequívoca para esa fecha, página 179 del plenario.

Conforme a los IBC que pueden verse en la historia laboral de la demandante, es correcta la apreciación realizada por la *a quo* respecto a equiparar la mesada pensional al salario mínimo legal mensual vigente, para cada año, pues al aplicarle al IBL la tasa de reemplazo del artículo 20 del decreto 049 de 1990, se deviene una suma inferior a esta.

Objeto de apelación por el procurador judicial de la parte actora, fue la prosperidad de la excepción de prescripción, de manera parcial, sin embargo, se comparte por este cuerpo colegiado la decisión tomada en primera instancia, pues habiéndose solicitado la prestación de vejez el 22 de septiembre de 2011, conforme se enuncia en acto administrativo 006972 de 2012, no se observa actividad alguna de la demandante de manera posterior a dicha fecha, por el contrario, sólo hasta el 23 de enero del año 2015 se presentó a reclamar la indemnización sustitutiva, conforme se indica en resolución GNR 125751 de 2015 y si bien le asiste razón al apoderado en indicar que debió Colpensiones realizar un estudio pormenorizado de la situación pensional de la demandante, también lo es que la interrupción de la

prescripción se da por una sola vez, es decir, desde el 22 de septiembre de 2011. Sólo el 10 de septiembre de 2015 se radicó la demanda, conforme sello de apoyo judicial página 22 del proceso, denotándose inactividad de la parte demandante en acceder al aparato jurisdiccional. Por ello, la prosperidad parcial del fenómeno prescriptivo habrá de confirmarse.

Respecto a la excepción de cosa juzgada, no se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 330 del Código General del Proceso pues en el proceso tramitado por la demandante bajo el radicado 05001310500820120044600, sólo versaba como extremo pasivo Colpensiones, y en dicho trámite no se evidenció la ausencia de las semanas laboradas ante Industrial Concreto SAS, sin que se observe entre ambos procesos, identidad fáctica alguna, para lo cual, se recuerda la voz de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que expuso en sentencia SL15550-2017:

[...] se considera necesario recordar lo que se entiende por cosa juzgada, para lo cual sirve de soporte pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral contenido en la sentencia SL11414-2016, así:

Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, para que sea procedente, es preciso recordar que, en ambos procesos judiciales debe concurrir los tres requisitos comunes que son: 1) Identidad de persona (eadem personae): debe tratarse del mismo demandante y demandado; 2) Identidad de la cosa pedida (eadem res): el objeto o beneficio jurídico que se solicita (no el objeto material) debe ser el mismo, es decir, lo que se reclama; y 3) Identidad de la causa de pedir (eadem causa petendi): el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo, esto es, el por qué se reclama. Los anteriores requisitos o elementos, se encuentran presentes en la norma que consagra la cosa juzgada, valga decir, el art. 332 del CPC hoy art. 303 del Código General del Proceso,

aplicable por analogía del art. 145 del CPTSS, que exige para su declaratoria que “el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.

Respecto a ese punto, la providencia deberá ser confirmada.

Sobre la compensación indexada, al haberse demostrado plenamente el derecho que le asiste a la señora María Berenice Macías De Aguilar al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a quien Colpensiones en su momento le reconoció indemnización sustitutiva por la suma de \$19.674.320, de acuerdo a Resolución GNR 125751 de 29 de abril de 2015, comparte el despacho lo concluido por la juez de instancia, pues de acuerdo a lo establecido en sentencia SL 359 de 2021, la corrección monetaria **no solo procede ante solicitud de parte,** sino, por el simple transcurso del tiempo, más aún en este caso, cuando se trata de una afiliada al régimen de prima media, el cual, tiene una naturaleza solidaria, razón por la cual, deberá ser la indexación confirmada.

Ahora, sobre los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, Sala de Casación Laboral ha indicado en su línea jurisprudencial que no son de imposición automática, pues no proceden en los siguientes casos: (sentencia SL 1370 de 2020):

“1. El derecho pensional reclamado se hubiese causado antes de la vigencia de esa ley, es decir, previo al 1° de abril de 1994 (CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 34358).

2. Existe una nueva liquidación que genere un mayor valor o diferencias en la mesada pensional (CSJ SL 6 dic. 2011, rad. 30852 y CSJ SL17725-2017).

3. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013).

4. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL 787-2013, rad.43602, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016).

5. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema. Así se expuso en la sentencia CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018 y CSJ SL4129-2018.

6. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016).

7. Existe controversia entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tal como se precisó en sentencias CSJ SL 21 sep. 2010, rad. 33399 y CSJ SL 14528-2014”.

Ausente el caso de marras de las excepciones explicadas por la Corte, le asiste razón a la parte actora al solicitar que en el presente caso es procedente el pago de los intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993, sin embargo, es importante precisar que la prescripción declarada de manera parcial frente a las mesadas pensionales, también contó con su cometido respecto a dichos intereses, pero no de manera extintiva como los se dijo en sentencia de primera instancia, pues la mesada pensional tan solo se reconoce a partir del 10 de septiembre del año 2012, en atención a la prosperidad parcial de la excepción, y por ende, desde la exigibilidad de la mesada del 10 de septiembre del año 2012, correrán los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

Así las cosas, confirmará y revocará la decisión que se revisa en apelación y consulta, por las razones expuestas.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar los numerales **PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO** de la sentencia proferida en primera instancia.

SEGUNDO: Revocar el numeral **TERCERO** de la sentencia y en su lugar **CONDENAR** a Colpensiones a reconocer y pagar a la demandante los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde la exigibilidad de la mesada del 10 de septiembre del año 2012.

TERCERO: Sin costas en esta instancia, se confirman las impuestas en primera.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **17450c57c2bf1abeee22ccdc80bf9e95166fafe0d256d0cfd648b920348c0618**

Documento generado en 16/02/2023 02:57:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>